

EN TORNO A LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA*

EUSEBIO MUJAL-LEÓN**

La transición hacia la democracia finalmente ha terminado en España. Cuarenta y tres años después del término de la Guerra Civil, y siete años desde la muerte del Generalísimo Franco, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha logrado una aplastante victoria en las elecciones generales de octubre de 1982. Al obtener más del 46% de la votación y 202 de los 350 escaños del Congreso de Diputados, los socialistas han ganado más que justamente el derecho a formar gobierno y la oportunidad de contribuir a la consolidación definitiva de la democracia española.

I

España ha experimentado una notable transición desde el autoritarismo a la democracia. Este proceso, único y ejemplar debido a su carácter legal y ordenado, ha producido una monarquía constitucional; la legalización de prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo a maoístas y trotskistas, así como otros vinculados a los movimientos separatistas; elecciones nacionales municipales y regionales, entre junio de 1977 y marzo de 1980; una nueva constitución; y un estatuto de autogobierno para el País Vasco y Cataluña.

La muerte de Franco terminó con su régimen y abrió el camino para la democratización de las estructuras políticas españolas. Las bases económicas y sociales de esta transformación habían sido construidas por el desarrollo económico y la modernización de la década del setenta. El resultado de la transformación de la estructura social española sig-

* Partes de este artículo provienen de "The Washington Quarterly", Vol. 5, N° 2, Spring 1982, pp. 101-107. Ha sido actualizado por el autor especialmente para este número de la Revista de Ciencia Política.

** Eusebio Mujal-León es profesor auxiliar de Gobierno de la Universidad de Georgetown. Ha escrito numerosos artículos y capítulos sobre la política española y portuguesa, y su libro "Communism and Political Change in Spain" será publicado a fines de este año por Indiana University Press.

nificó la expansión de las clases medias y generó una sociedad orientada al consumo. La influencia política y social del catolicismo y de la Iglesia, uno de los principales pilares del régimen de Franco, también declinó. La asistencia a misa decayó, especialmente entre la juventud; el número de postulantes al sacerdocio bajó agudamente. Paralelamente, presionada por el Concilio Vaticano II y por la politización de muchos sacerdotes y activistas católicos de las poblaciones obreras, la Iglesia española derivó hacia una posición de neutralidad crítica frente al régimen.

La estrategia económica seguida por el régimen franquista durante los años sesenta puso énfasis en la atracción de la inversión extranjera y en la incorporación de España al sistema económico occidental. Se fomentaron lazos más estrechos entre España y el resto del continente a través del turismo, la migración y otras formas de intercambio económico. A medida que este proceso se profundizaba, los españoles empezaron a identificarse con las ideas culturales y políticas europeas. El resultado fue la desaparición gradual de la idea, propagada con insistencia por el régimen franquista, que la democracia inevitablemente producía caos, desorden y guerra civil.

Estos factores contribuyeron a la desintegración de la legitimidad del gobierno autoritario y a la emergencia de un ethos democrático, sin los cuales la transición pacífica no hubiera sido posible. Varios sucesos durante los años setenta aceleraron los procesos paralelos de desintegración y democratización y exacerbaron las tensiones dentro de la elite política franquista. Ya hacia mediados de la década del sesenta había evidencia de serios conflictos internos dentro de la coalición franquista, pero el faccionalismo se fue pronunciando con fuerza después de 1973, con el deterioro físico de Franco y el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco por la organización terrorista Euzkadi ta Akatasuna (ETA).^{*} Carrero Blanco era el hombre que iba a asegurar una transición ordenada después de Franco hacia el reinado del nuevo monarca. Su asesinato reabrió el debate sobre la permanencia del régimen, poniendo en movimiento la lucha por la sucesión. Importante también fue la caída, en abril de 1974, de la dictadura de casi cincuenta años en el vecino Portugal. Aunque el golpe portugués tuvo causas específicas, pues fue producto directo de la radicalización de los militares al perder una guerra colonial, de todas maneras produjo un estremecimiento entre la elite española.

A mediados de los años setenta, las estructuras del régimen no podían sostenerse más sin recurrir a la fuerza y ello a un precio que ni el pueblo ni los militares y la policía estaban dispuestos a pagar. Progresivamente, tanto los líderes del régimen como los de la oposición reconocían que ninguno era lo suficientemente fuerte como para dominar a los otros y esta conclusión los llevó finalmente a contenerse mu-

^{*} Patria Vasca y Libertad (N. del T.).

tuamente y a decidir la aceptación de la reforma, en lugar de derribar la estructura política.

Aun así, alguien tenía que aprovechar la oportunidad. Juan Carlos, el sucesor designado por Franco, desafió las expectativas sobre su ascensión al trono, en el sentido de que sería poco más que una figura decorativa. En lugar de ello, el Rey Juan Carlos demostró una rara habilidad política, no sólo en usar juiciosamente los amplios poderes que Franco había puesto a su disposición, sino también en la elección de Adolfo Suárez como Primer Ministro en 1976. Este último como funcionario de carrera no tenía una fuerte ideología o preferencia política en especial. Alejándose de los grupos más conservadores dentro del régimen, atrayendo el apoyo de la oposición moderada y maniobrando con aquellos que abogaban por un rompimiento decisivo con las estructuras políticas del franquismo, el Rey y Suárez dirigieron el proceso hacia las elecciones democráticas en junio de 1977.

II

Las elecciones de 1977 confirmaron la victoria del Primer Ministro Suárez y la emergencia del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) como el principal partido de oposición. Otro notable resultado de la elección fue la débil actuación de la franquista Alianza Popular (AP) y del Partido Comunista, ninguno de los cuales recibió más del 10% de la votación.

El proyecto de la nueva Constitución para reemplazar las Leyes Fundamentales mantuvo ocupadas a las Cortes (Parlamento) después de 1977. Una Constitución, llamada del consenso, fue finalmente aprobada en octubre de 1978 y aceptada en referéndum nacional en diciembre de 1978. Con la aprobación de la Constitución estaba dispuesto el escenario para la decisión de Suárez de llamar a nuevas elecciones para marzo de 1979. En contra de las expectativas de los socialistas, quienes pensaban que en esta ocasión aventajarían a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, éste triunfó una vez más. No hubo aumento sustancial en el número de votos de la UCD y los comunistas no mejoraron mucho respecto de su actuación de 1977.

El resultado más notable de las elecciones de marzo de 1979 fue la consolidación de los partidos regionales. Esto ocurrió no sólo en Cataluña y en el País Vasco, sino también, aunque en menos extensión, en Andalucía. El surgimiento de estos partidos fue dramático en el País Vasco donde la llamada Izquierda Abertzale* obtuvo el 22% de los votos. La coalición Euskadiko Eskerra recibió el 6,3% de la votación en esta vuelta, mientras Herri Batasuna, un partido ligado a la más radical de las facciones de la ETA, reunió cerca del 13% de los votos. Las pérdidas más serias que sufrió el PSOE tuvieron lugar en el País

* Palabra vasca para independentista o nacionalista (N. del T.).

Vasco, donde bajó del 25 al 20% de la votación. Entre 1977 y 1979 la proporción de la votación vasca obtenida por los partidos vascos "éticos" subió del 35,6 al 55,3%.

El apoyo recibido por los partidos regionales en el País Vasco y Cataluña evidenció el grado en que España todavía se encontraba en proceso de búsqueda de una síntesis nacional. El regionalismo ha sido un problema recurrente en España, pero el régimen de Franco, al considerar todas las manifestaciones de tales sentimientos como una traición, sólo logró exacerbarlos. Su política represiva, tal como la prohibición de la enseñanza en vasco y catalán y del uso público de estos idiomas, así como la obligación de extender los certificados de bautismo y matrimonio utilizando sólo nombres en español,* provocaron una desconfianza visceral, especialmente en el País Vasco. Allí el sentimiento nacionalista de izquierda encontró una manifestación extrema en los diversos grupos terroristas de la ETA, que empezaron a surgir en los años sesenta. Muchos esperaron que, con la instalación de la democracia y la amnistía para los crímenes "políticos" anunciadas por el gobierno nacional, el problema vasco finalmente podría ser resuelto. La nueva constitución y los estatutos de autonomía que garantizaban atribuciones de autogobierno en materias de administración, educación y orden público fomentaron estas esperanzas, pero la indecisión del gobierno, la falta de cooperación de Francia en la lucha antiterrorista y las demandas por independencia provenientes de los nacionalistas extremistas obstaculizaron esos esfuerzos. En este ambiente los grupos de la ETA aumentaron sus ataques. Entre 1978 y 1980, la ETA asesinó a 240 personas, la gran mayoría de las cuales eran militares u oficiales de la policía. La profundidad de la polarización que afectaba a la sociedad vasca se reveló mediante una encuesta realizada en noviembre de 1979, en la que el 50% de aquellos que respondieron creían que los miembros de la ETA eran o "patriotas" o "idealistas".

La incapacidad del gobierno de Suárez para manejar el recrudescimiento del terrorismo deterioró sus relaciones con los militares. Aislados del resto de la sociedad española bajo Franco, los militares habían permanecido leales al régimen aceptando renuientemente las reformas auspiciadas por el Rey Juan Carlos. Ello no se debía a que los oficiales militares superiores hubieran asumido actitudes democráticas, sino que se mantenían leales al Rey y creían en sus garantías y seguridades de que habría una descomprensión controlada de la sociedad. Pero mientras la mayoría de los oficiales aceptaban disciplinadamente las decisiones civiles, los militares permanecían básicamente fuera del control civil. El gobierno se movía también muy cuidadosamente, no interfiriendo, por ejemplo, cuando un tribunal militar impuso sentencias ridículamente bajas a oficiales implicados en la planificación de un intento de golpe, en octubre de 1978.

* Castellano (N. del T.).

La imposición del control civil sobre los militares se convirtió en un asunto especialmente urgente desde el intento de golpe en febrero de 1981. En ese momento, con el Congreso de los Diputados como rehén, sólo la firme actitud del Rey y la prudencia de algunos oficiales superiores salvaron la situación para la democracia. Desde entonces, el temor de un golpe militar ha sido una espada de Damocles pendiente sobre la sociedad española. El así llamado "síndrome del 23 de febrero" produjo numerosos rumores y especulaciones sin fin acerca de intrigas e intenciones de los militares. El gobierno de Calvo Sotelo respondió dando a los militares un activo papel en la lucha contra el terrorismo vasco y fomentando retiros anticipados en la cúpula de las Fuerzas Armadas españolas. En un esfuerzo adicional precautorio, dirigido a estrechar la disciplina durante los juicios de los implicados en el golpe de febrero de 1981, el gobierno reorganizó el alto mando a principios de 1982, designando nuevos hombres en la Junta de Jefes de Estado Mayor.*

Sin embargo, otros problemas persistieron en el "establishment" militar. Los tribunales militares trataron en forma bastante indulgente las infracciones disciplinarias de los derechistas y muchos españoles se preguntaban acerca de la lealtad de algunos oficiales superiores que tenían alguna relación con el intento de golpe de febrero, pero no lo suficiente como para ser procesados por ello. Más preocupante, sin embargo, fue la insubordinación de oficiales jóvenes que organizaron un movimiento clandestino para distribuir panfletos subversivos y establecer una red nacional. Más aún, en diciembre de 1981, en el tercer aniversario del referéndum que aprobó la Consitución, cien oficiales y suboficiales firmaron un manifiesto en el que reprochaban el trato dado por la prensa a los militares como institución. Las Fuerzas Armadas, decían, "en orden a mejorar el cumplimiento de su misión, no necesitan ser profesionalizadas, democratizadas o purgadas". Sólo la aplicación rápida de enérgicas medidas por la jerarquía militar impidió que varios cientos de oficiales, muchos de la importante Primera Región Militar, no firmaran el documento.

Los problemas que el gobierno español tenía para asegurar el control civil sobre los militares dicen relación con el debilitamiento de los principales partidos políticos nacionales surgidos después de 1977. Los partidos políticos de masas han reaparecido sólo recientemente en la escena española, después de un intermedio de 40 años. Algunos partidos, especialmente el Socialista y el Comunista, tienen una larga historia en la política española, pero aun a ellos no les ha sido fácil transformar sus estructuras de la clandestinidad y adaptarse a una sociedad que funcionó sin ellos por varias décadas. Aunque el régimen de Franco puso fuera de la ley a los partidos políticos, permitió sin embargo la representación de grupos sociales y políticos, tales como la Falange, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, tecnócratas del Opus Dei, monárquicos,

* JUJEM (N. del T.).

industriales y terratenientes. Internamente divididos, y sin habérseles permitido nunca presionar por un reconocimiento político explícito, estos grupos estaban informalmente representados por individuos cercanos a Franco y/o en la red de influencia que ellos controlaban.

Aunque la política de la España de Franco fluía por canales completamente diferentes a los de otras sociedades de Europa Occidental, la sociedad española manifestaba tendencias paralelas a las de aquellas. Una corriente se daba en favor de los valores democráticos y participativos. Otra fue el crecimiento del Estado. En España la expansión de la burocracia favoreció las redes de poder existentes y éstas fueron sólo ligeramente tocadas por la reforma estructural dirigida por el Rey y Suárez. Esta situación se agravó con la virulencia del separatismo regional creando una división que ha sido difícil de sortear para los partidos políticos.

La debilidad de los partidos políticos animó a algunas personalidades prominentes a organizar diversas fundaciones y clubes políticos, con el objetivo de crear eventualmente otros partidos. Su idea era constituir un "partido bisagra" como eje de una alternativa de gobierno entre los socialistas y la posición centro-derecha. Tal proyecto incluía importantes personalidades conectadas con el diario nacional "El País". Esta presencia es significativa y refleja la importancia de la prensa durante la transición desde el franquismo. Cuando los partidos políticos eran todavía incipientes o clandestinos, la prensa, especialmente el semanario "Cambio 16" y "El País", fue protagonista de la diseminación de las ideas y de la cultura política democrática.

Con los partidos políticos legalizados y la celebración de elecciones parlamentarias, la prensa, sin embargo, puso su crítica mira sobre los partidos, así como sobre las Fuerzas Armadas, aunque con mayor circunspección hacia éstas últimas. La pobre imagen de los partidos políticos y la emergencia de los asuntos de orden público permitieron a la prensa mantener un alto perfil político, lo cual debilitó a los partidos.

La UCD se vio profundamente afectada por la perturbadora crisis de los partidos españoles. Las divisiones internas de la UCD eran evidentes ya antes del golpe de febrero y tuvieron un papel relevante en la renuncia de Suárez. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, vástago de una familia política y económicamente influyente, no estaba comprometido con ninguna de las facciones de la UCD y fue ampliamente aceptado en reemplazo de Suárez. Pero en razón de considerársele como interino en el cargo, la lucha se incrementó. Suárez, en el intertanto, también se unió a la refriega intentando reasumir su influencia. Inútiles escaramuzas personales así como políticas enfrentaron a demócratacristianos y liberales con los socialdemócratas y los partidarios de Suárez en asuntos como la subvención estatal a los colegios privados (católicos), la ley del divorcio, la abolición del monopolio del Estado sobre la televisión y el ingreso a la OTAN. En agosto de 1981 Fernández Ordóñez, el arquitecto socialdemócrata de la ley de divorcio y de la reforma fiscal, renunció al Ministerio de Justicia, y posteriormente a la UCD, en

la esperanza de formar un partido "bisagra". Por otra parte, Suárez, Calvo Sotelo y las diversas facciones prosiguieron su lucha por el control de la maquinaria partidaria de la UCD, especialmente del comité electoral, el que debería designar los candidatos para la próxima elección parlamentaria.

Asediado desde el interior, el gobierno de Calvo Sotelo enfrentaba también a la emergente Coalición Democrática (CD), heredera de la Alianza Popular (AP), dirigida por Fraga Iribarne. Este grupo de centro derecha había obtenido una sorprendente victoria en las elecciones regionales de Galicia, en octubre de 1981. En ella, la CD duplicó el porcentaje obtenido por la AP en las elecciones nacionales, dos años antes, en tanto que el total de la UCD fue reducido a la mitad. Dentro del partido de gobierno aumentó la presión por alguna clase de coalición con Fraga, pero Calvo Sotelo se mostró cauteloso, especialmente porque Suárez amenazaba con retirarse de la UCD. Además Calvo Sotelo pensaba que, respecto de los principales problemas, podría casi siempre contar con el apoyo de la CD, y que ante las elecciones un entendimiento formal con el grupo Fraga ayudaría al PSOE.

El PSOE, principal partido de oposición, había experimentado menores problemas de organización que los sufridos por la UCD. Con su rival, el Partido Comunista, sacudido durante los últimos dos años por amargas luchas internas, así como por una aguda disminución de sus miembros, el PSOE salía reforzado como el principal partido de la izquierda.

Desde febrero de 1981 los socialistas siguieron una doble estrategia: proyectándose como la única alternativa viable frente a la UCD y, paralelamente, enfatizando su moderación y su deseo de cooperar con el gobierno para lograr la estabilización de la situación política. Aún así, había límites para la cooperación UCD-PSOE, desde que cada partido veía al otro como su principal competidor en las elecciones nacionales de principios de 1983. En el ámbito regional, la UCD trató de aventajar a los socialistas ofreciendo a los gobiernos vasco y catalán una interpretación flexible y financieramente atractiva del acuerdo LOAPA,* un arreglo que debería asegurar uniformidad y coherencia en el proceso de devolución de poderes a las regiones.

La decisión de solicitar el ingreso a la OTAN fue otro motivo de desacuerdo. A fines del verano de 1981, después de mucha vacilación y algo de ambivalencia, el gobierno de Calvo Sotelo anunció que solicitaría a las Cortes la aprobación del ingreso de España a la OTAN. Esta decisión fue criticada fuertemente por el PSOE, el cual (aunque apoyaba la renovación del ya existente Tratado de Bases con los Estados Unidos) consideraba que existía un acuerdo con la UCD en el sentido que el gobierno no plantearía ese tema.

Los socialistas no estuvieron muy deseosos de adelantar las elecciones esperando que su cooperación con el gobierno las evitaría y que su

* LOAPA. Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico.

cooperación reforzaría sus credenciales de moderados. Con vistas a las próximas elecciones el programa social y económico aprobado por el Congreso del PSOE, en octubre de 1981, fue relativamente suave, enfatizando la modernización de la industria, un control más estricto del crédito, la creación de nuevos puestos de trabajo a través de programas públicos de empleo, y bajando el tono al tocar el tema de la nacionalización.

El gobierno de la UCD enfrentó muchos problemas en su último año de mandato. Cinco años en el poder erosionaron su imagen y agravaron las tensiones entre las diversas personalidades y grupos dentro de él. Más aún, ello coincidió con el resurgimiento y legitimación de las posiciones de Centro-Derecha (encarnados en la CD), lo cual hizo que la UCD fuera una alternativa menos atractiva para los electores, quienes una vez la consideraron como el único obstáculo contra la desintegración. Más aún, el partido se encontraba desorganizado habiéndole abandonado casi un cuarto de los 168 diputados elegidos bajo sus banderas en 1979; incluso Suárez quien dejó a la UCD para fundar el Centro Democrático Social (CDS), en agosto de 1982.

El gobierno de la UCD había avanzado algo en el plano económico: bajó la inflación y aumentaba la producción interna de carbón. Esto último produjo una disminución de la dependencia de las fuentes de energía foráneas. Pero globalmente había problemas serios. El número de desempleados se había elevado a dos millones aproximadamente, la tasa más alta en Europa Occidental. La lenta inversión pública y el creciente déficit del sector público amenazaban con minar el progreso alcanzado.

Las elecciones regionales en Andalucía, que se celebraron en mayo de 1982, fueron críticas en determinar el destino del gobierno de la UCD.

El Centro sufrió allí una relativa derrota. El PSOE no sólo obtuvo más del 52% de los votos de la región (59 de los 350 diputados de las futuras Cortes serían elegidos por ella), sino que la UCD disminuyó bastante su votación, llegando al tercer lugar con sólo el 13%, detrás de la Alianza Popular (AP) de Fraga Iribane. La derrota apresuró la descomposición de la UCD y Suárez por su parte decidió a mediados del verano abandonar el partido que él había creado. Por entonces el gobierno y Calvo Sotelo habían perdido el apoyo público que pudieran haber tenido, produciéndose una situación difícil de solucionar mediante el cambio en la directiva del partido realizado al elegir a Landelino Lavilla, quien era Presidente de las Cortes, como nuevo Presidente de la UCD. Con los socialistas emergentes (las encuestas públicas y las efectuadas por el gobierno mostraban las preferencias por el PSOE muy por encima de los otros partidos) y la UCD habiendo perdido el control efectivo del Parlamento, Calvo Sotelo solicitó al Rey la disolución de las Cortes y la convocatoria a nuevas elecciones populares para octubre.

ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS
OCTUBRE 1982

CUADRO GENERAL

Censo: 26.837.212. N° Votantes: 21.353.996. Índice de partic.: 79,5. Abstención 20,5%

Partidos	N° de votos	%	Escaños	Escañ. 1979
Partido Socialista Obrero Español	9.836.579	46,0	202	121
Alianza Popular - Partido Demócrata Popular	5.412.401	25,3	105 *	9
Unión de Centro Democrático	1.549.447	7,2	13 *	168
Convergencia i Unió	794.554	3,7	12	8
Partido Nacionalista Vasco	406.804	1,9	8	7
Partido Comunista de España	824.978	3,8	4	23
Centro Democrático Social	615.540	2,8	2	
Herri Batasuna	206.748	0,9	2	3
Esquerra Republicana de Catalunya	140.870	0,6	1	1
Euskadiko Eskerra	98.652	0,4	1	1

* AP suma un diputado obtenido por la coalición vasca de derechas en Vizcaya, y UCD hace lo propio con el logrado en Alava.

Fuente: Diario 16. 9 de octubre de 1982.

III

La victoria socialista en octubre de 1982 había sido prevista, y por ello hubo escasa sorpresa una vez anunciados los resultados. Lo que sorprendió, incluso a la directiva del PSOE, fue la magnitud de su victoria y el consiguiente colapso de la UCD. Los socialistas obtuvieron el 46% de la votación y 202 escaños en el Congreso de Diputados. Esto último les dio la mayoría absoluta y la oportunidad de aprobar cualquier legislación que el partido desee. Como se esperaba, al PSOE le fue bien en las zonas urbanas, pero la dimensión de su triunfo fue evidente con las victorias alcanzadas en provincias tradicionalmente conservadoras, como Salamanca y Zamora. ¿Por qué les fue tan bien a los socialistas? ¿Cuáles son las perspectivas para España bajo los socialistas?

La victoria socialista de octubre de 1982 es producto de varios factores. El primero y más importante es el éxito del partido, y especialmente de su carismático líder, Felipe González, en convencer a los españoles de la moderación del PSOE, así como de su compromiso para depurar profundamente la burocracia y la administración. La fuerte dimensión ética y la determinación demostrada por los líderes socialistas establecieron un marcado contraste con la imagen pública proyectada

por la UCD, de amargas luchas intestinas, cuyo objeto pareciera ser, en palabras de un taxista, "simplemente mantenerse con el coche oficial".* El deterioro de la imagen pública de la UCD llevó a algunos de sus votantes a la tienda socialista (aproximadamente el 10% de los que votaron por el Centro en marzo de 1979), mientras que otros, más bien la mayoría, se inclinó por la posición de Fraga Iribarne. Aunque su Alianza Popular obtuvo ganancias a partir de la desintegración de la UCD (el Centro recibió sólo el 7% de la votación y ganó 12 escaños comparados con el 34% y los 168 escaños de marzo de 1979), los españoles no estaban listos para votar por el conservantismo de Fraga, debido quizás a que les recordaba demasiado la época de Franco.

Los socialistas se benefician también de la desintegración de la UCD en otro sentido. Con la debacle del Centro y la emergencia del PSOE como una **alternativa viable de gobierno**, muchos votantes comunistas abandonaron el PCE. Este se había consumido en luchas faccionales internas, ya desde principios de 1980, y Santiago Carrillo había ofrecido su renuncia al Comité Central en junio de 1982. Con el PCE dividido fuertemente entre "renovadores", "eurocomunistas" y "prosoviéticos", los socialistas atrajeron más de un millón de votos comunistas.

Los socialistas asumen el poder con un fuerte apoyo popular, pero en una época de profunda crisis económica y política. El claro resultado de las elecciones de octubre, en las que cuatro de cada cinco de los inscritos votaron, debe ser interpretado como un referéndum en favor de la democracia y contra los crecientes rumores preelectorales de un golpe.

Sin embargo, la economía está en problemas. La tasa de desempleo es de casi un 15% (en algunas regiones alcanza al 25%), la inflación más o menos del mismo nivel, y el déficit del sector público, que se ha triplicado en los últimos años alcanzando un nivel de más de nueve mil millones de dólares, no se prestan a soluciones fáciles.

El programa que han propuesto los socialistas para enfrentar estos problemas ha sido moderado. A diferencia de su contraparte francesa, el PSOE no ha propuesto una racionalización industrial amplia, prefiriendo ejercer su influencia mediante un mayor control del crédito y de la actividad bancaria, así como de una rápida implementación del Impuesto al Valor Agregado y una reducción del fraude y de la evasión de impuestos.

Mediante la readecuación e incremento del crédito otorgado bajo la égida del Estado, los socialistas esperan que se inicie una mayor actividad económica y se reduzca el desempleo o, más factiblemente, se mantenga en los actuales niveles. La disminución de éste es la primera prioridad socialista pero el precio probable será una tasa de inflación más alta. Para combatir este peligro, los nuevos dirigentes planifican hacer más eficaz la maquinaria administrativa, devaluar la peseta para

* En español, en el original.

incrementar las exportaciones, adoptar una política de ingreso cuya finalidad es mantener bajos los salarios reales. La voluntad pública probablemente coincidirá con esta política, pero los socialistas no pueden contar con una restricción de salarios indefinida, en especial si la inflación no es contenida. El fracaso en el plano económico podría agravar las tensiones sociales.

La desintegración de la centrista Unión de Centro Democrático (UCD), el partido gobernante de España desde junio de 1977, y la campaña fuertemente cargada de retórica de la derecha pueden ser el preludio de una posición muy agresiva de los grupos conservadores y de las instituciones que se oponen a los socialistas.

El grado de esta oposición dependerá, en alguna medida, de Manuel Fraga Iribarne, jefe de los conservadores. El fue tanto ministro de Franco como uno de los forjadores de la nueva Constitución española, y así personifica las tensiones entre el conservantismo antimoderno y el constitucional en la España de hoy. Algunos de sus partidarios sienten poca fidelidad por el sistema democrático.

La magnitud de la victoria socialista no debería hacer olvidar la continua fuerza de la derecha en la política española. Frente al colapso de la UCD, el 25% de los votantes apoyaron a los conservadores. Los elementos conservadores mantienen su fuerza en la administración burocrática y en las Fuerzas Armadas. Aunque la mayoría de los oficiales del Ejército son leales al Rey y a la Constitución, ni ellos ni muchos funcionarios de alto nivel son entusiastas del gobierno socialista. Los socialistas deben actuar firme pero prudentemente a medida que emprenden la reforma de dichas instituciones. Realizar una rápida purga de elementos neofranquistas sería desastroso y socavaría la efectividad del Gobierno, por decir lo menos.

La organización terrorista vasca ETA constituye el mayor problema de orden público para el nuevo gobierno. Los socialistas estarán bajo una presión muy grande para negociar con ETA, pero los conservadores, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, se oponen porfiadamente a conceder más competencia en materias económicas y de policía al gobierno regional y a la legalización de los partidos que tienen como objetivo la independencia vasca.

Los socialistas tienen razón para celebrar su victoria electoral. Frente a ellos se encuentran las arduas tareas de, por una parte, gobernar una sociedad fragmentada cuyas instituciones democráticas no se encuentran todavía firmemente consolidadas y, por otra, de modernizar una ineficiente, y a veces corrupta, administración burocrática. Los problemas que España enfrenta no son insolubles, pero requerirán políticas pragmáticas, hábil dirección y mucha suerte.